



**Convención internacional
sobre la Eliminación
de todas las Formas
de discriminación racial**

Distr.
GENERAL

CERD/C/SR.1173
29 de septiembre de 1997

ESPAÑOL
Original: FRANCÉS

COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

49.º período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 1173.ª SESION

celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra,
el jueves 15 de agosto de 1996, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. BANTON

SUMARIO

Examen de los informes, observaciones e información presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención (continuación)

- Informes periódicos 8.º a 12.º de Mauricio
- Informes periódicos tercero a décimo del Zaire (continuación)

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en forma de memorando y, además, incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha el presente documento, a la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, Oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas se reunirán en un documento único que se publicará poco después de la clausura del período de sesiones.

Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

EXAMEN DE LOS INFORMES, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN (tema 5 del programa) (continuación)

Informes periódicos 8.º, 9.º, 10.º, 11.º y 12.º de Mauricio (CERD/C/280/Add.2; HRI/CORE/1/Add.60)

1. Por invitación del Presidente, la delegación de Mauricio toma asiento como participante a la Mesa del Comité.

2. El Sr. BAICHOO (Mauricio) dice que su país se complace en reanudar el diálogo con el Comité. Plurilingüe, pluriétnico y multirracial, Mauricio es un país tradicionalmente respetuoso de los derechos humanos y del principio de la unidad en la diversidad. La delegación mauriciana está dispuesta a responder a las preguntas que deseen formular los miembros del Comité respecto de su informe.

3. El Sr. SEETULSINGH (Mauricio) dice que su país ha ratificado la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos. En 1995 Mauricio presentó informes al Comité contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, en marzo de 1996, al Comité de Derechos Humanos; en octubre presentará un informe al Comité de los Derechos del Niño. Además, en octubre de 1996 Mauricio acogerá la reunión del Comité creado en aplicación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, oportunidad en la que presentará un informe.

4. Mauricio es una democracia efectiva, con un gobierno parlamentario. En diciembre de 1995 se eligió un nuevo gobierno. Los miembros de los dos partidos en el poder pueden ser de distinta ascendencia (india, musulmana, africana, europea, china o mestiza), pero les une en su dedicación al progreso y al estado de derecho. La prensa tiene una actitud muy vigilante en lo que toca al respeto de los derechos humanos y de la democracia y señala toda situación en la que pudieran atropellarse los derechos de los ciudadanos. También son muy activas las organizaciones no gubernamentales y, por ejemplo, Amnistía Internacional ha recibido recientemente fondos de una organización escandinava para un programa de enseñanza en Mauricio. El Ministerio de Educación coopera también con el UNICEF para promover los ideales de paz, tolerancia e interdependencia en el marco escolar. El nuevo Gobierno ha decidido crear una Comisión para la igualdad de oportunidades, y no se admite ninguna discriminación en la contratación de funcionarios públicos. Por último, en el Ministerio de Justicia se va a establecer una pequeña dependencia de derechos humanos para mejorar los procedimientos de presentación de informes.

5. El Sr. GARVALOV (Relator para el país) se felicita de que se haya reanudado el diálogo entre Mauricio y el Comité y de que esté presente una delegación del Estado Parte. El Relator agrega que para elaborar su propio informe se ha remitido no sólo al informe periódico que se examina y al documento de base publicado con la signatura HRI/CORE/1/Add.60, sino también a los trabajos pertinentes del Comité de Derechos Humanos, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y del Comité de los Derechos del Niño.

6. Cabe recordar que en marzo de 1994 el Comité examinó la aplicación de la Convención en Mauricio sin disponer de un informe ni de la presencia de una delegación del Estado Parte. Por lo tanto, en sus conclusiones el Comité señaló a la atención del Gobierno la posibilidad de pedir asistencia técnica al Centro de Derechos Humanos. También observó que no parecía haber ningún problema grave de discriminación racial, pero expresó su deseo de recibir información más precisa sobre la composición étnica de la población, las medidas adoptadas para dar cumplimiento al artículo 4 de la Convención y los recursos judiciales de que disponían las personas que se consideraran víctimas de discriminación racial. Por último, el Comité solicitó información complementaria sobre las medidas adoptadas en el marco de la enseñanza para promover la tolerancia.

7. El informe que se examina presenta grandes mejoras en comparación con el anterior: se conforma a las directrices del Comité, contiene informaciones útiles y proporciona respuesta a ciertas preguntas. Entre las iniciativas recientes dignas de encomio el Relator desea mencionar la Ley de reuniones públicas de 1991 (párr. 33) que, en conjunto con el artículo 282 del Código Penal, sanciona la incitación al odio racial y la ley de enmienda de la Ley de ciudadanía, de 1995 (párr. 50), que facilita la naturalización y reconoce la doble nacionalidad, en el sentido de las disposiciones de la Convención.

8. En primer lugar, desde un punto de vista general, la información proporcionada sobre la composición étnica de la población es interesante y no podría considerarse como inquietante el hecho de que en nombre de la identidad nacional los poderes públicos prefieran no incluir en los censos un desglose de la población por comunidad (a condición, claro está, que ello no encubra una política de asimilación forzada). ¿Por qué entonces se llama "población general" a la población de ascendencia criolla y europea y por qué se menciona a los "musulmanes" entre los grupos étnicos? En cuanto a la composición de la Asamblea Nacional, se dice en el párrafo 6 del informe que ocho de sus 70 miembros son seleccionados entre los perdedores mejor situados en las elecciones. ¿Cómo garantiza este sistema en la práctica una representación equitativa de los diversos componentes étnicos? El Relator desearía asimismo que la delegación confirme si puede invocarse directamente la Convención ante los tribunales mauricianos -como parece inferirse del párrafo 12 del informe- lo que sería un hecho muy positivo.

9. En cuanto a la información relativa al artículo 2 de la Convención, se dice que el artículo 16 de la Constitución prohíbe la aprobación de cualquier ley que sea discriminatoria, con "ciertas excepciones" (párr. 16 del informe). ¿Cuáles son esas excepciones? Asimismo, la información contenida en los párrafos 17 a 19 del informe sobre las disposiciones constitucionales que garantizan los derechos civiles y políticos es sin duda interesante, pero parece destinarse más bien al Comité de Derechos Humanos. En relación también con el artículo 2, se dice en el párrafo 20 del informe que en ciertas circunstancias puede negarse a una confesión religiosa o asociación el derecho de fundar una escuela a sus expensas. ¿Cuáles son, en este caso, esas circunstancias? En el párrafo 23 se hace referencia a las disposiciones del Código Penal relativas a los actos de incitación al odio racial. ¿Por qué no se prohíben esos actos o, al menos, no se declara por ley que constituyen delitos punibles? Por último, en el párrafo 31 se dice que desde el informe anterior no se ha denunciado ningún caso de discriminación racial. ¿Hay que inferir que no se ha interpuesto ninguna

denuncia ante los tribunales por falta de motivos? ¿O será más bien que por diversas razones no se acude a los tribunales?

10. En cuanto a la aplicación del artículo 3 de la Convención se recuerda que Mauricio estableció relaciones con Sudáfrica después de la abolición del apartheid en ese país. La información proporcionada en relación con el artículo 4, en la que se hace referencia a la Ley de reuniones pacíficas de 1991 y al artículo 282 del Código Penal es un poco concisa y parece que Mauricio no ha cumplido cabalmente con las obligaciones establecidas en el apartado b del artículo de que se declare ilegal y se prohíba toda actividad que incite al odio racial. Parece también que en algunas esferas del derecho privado no abarcadas por el artículo 16 de la Constitución, por ejemplo, la adopción, el matrimonio y el divorcio, debería complementarse la legislación para eliminar todo riesgo de discriminación.

11. En cuanto a la aplicación del artículo 5 de la Convención, la información contenida en el informe no permite al Comité saber si algunas de las limitaciones a la libertad de prensa previstas en la Constitución se fundan en la necesidad de impedir que se manifiesten los prejuicios raciales. En efecto, en el párrafo 31 se menciona la prohibición de un libro por cuanto podía atizar conflictos raciales, y cuando el Comité de Derechos Humanos examinó el tercer informe periódico de Mauricio, tomó nota con preocupación de que poco antes se habían prohibido dos obras literarias sin decisión judicial y que la libertad de expresión era objeto de restricciones fuera del marco de la ley. A juzgar por el informe, las disposiciones que rigen la nacionalidad, el matrimonio, la propiedad, la libertad de religión, la vivienda, el derecho a la salud y a la seguridad social, la educación y las actividades culturales concuerdan completamente con las prescripciones de la Convención. En cuanto al derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales se dice en el informe que la doctrina de la separación de poderes garantiza la independencia del poder judicial (párrafo 39) y nada autoriza a poner en duda esta afirmación. Con todo, el Relator desea subrayar que la independencia del poder judicial a veces la Constitución consagra, pero que en la práctica las consideraciones políticas influyen en el nombramiento de los jueces. En el plano de los derechos políticos, desearía saber si se autoriza la formación de partidos o de organizaciones políticas sobre una base étnica o religiosa. Por otra parte, toma nota de que el desempleo ya no parece ser un problema en el Estado Parte, en que, por el contrario, escasea la mano de obra. En cuanto al derecho a participar en las actividades culturales, el párrafo 89 menciona los centros culturales chino, islámico y africano; ¿significa acaso que no hay centros culturales para las personas de origen criollo y europeo?

12. El informe contiene información útil sobre la aplicación del artículo 6 y se señalan las vías de recurso que se ofrecen a las personas cuyos derechos hayan sido violados por un acto de discriminación racial. Sin embargo, hay que lamentar que no se haya proporcionado información alguna sobre casos concretos. Entre la información proporcionada sobre la aplicación del artículo 7, el Relator destaca con satisfacción que en el plan general de educación para el año 2000 (párrafo 98) se prevé en particular la enseñanza de los valores humanos y la educación para una vida mejor. En cuanto a la utilización de los idiomas, la información proporcionada en los párrafos 90 y 101 de que se utilizarían diez idiomas (inglés, francés, hindi, bhojpuri, tamil, telegu, marathi, mandarín, urdu y criollo) plantea ciertas interrogantes. De hecho, en el marco del Comité

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se dijo recientemente que aún se prohíbe en la Asamblea Nacional y se desalienta activamente en todos los organismos públicos la utilización de los dos principales idiomas hablados por el 92% de la población (criollo y bhojpuri). Por su parte, en enero de 1996 la Federation of Pre-School Playgroups, organización no gubernamental que se ocupa de los derechos de los niños, declaró que aún se practicaba la discriminación étnica en Mauricio y que el derecho de la mayoría a utilizar el criollo y el bhojpuri no parecía respetarse ni en la enseñanza ni en los medios de comunicación. Por lo tanto, sería conveniente que el Estado Parte proporcionara una aclaración a este respecto.

13. En conclusión, el Relator dice que Mauricio ha presentado un informe de calidad, digno de encomio.

14. El Sr. de GOUTTES se felicita de la reanudación del diálogo con Mauricio después de tantos años, pero señala que si bien los documentos que el Comité tiene ante sí le informan acerca de los textos que garantizan los derechos de los mauricianos, por una parte el estudio de estos textos suele ser a menudo de la incumbencia del Comité de Derechos Humanos, y por otra parte faltan datos concretos sobre su aplicación. Así, no se ha proporcionado la información solicitada en 1987, y más tarde en 1994, sobre la composición étnica de la población. La explicación dada en el párrafo 4 del informe refleja por cierto una buena intención, como es promover una identidad mauriciana independiente del origen étnico de los habitantes, pero el Comité no puede trabajar sobre una base segura si no dispone de estos datos.

15. También falta información sobre los indicadores socioeconómicos, como los índices de desempleo, de mortalidad, de suicidio, de prostitución, etc., que el Comité necesita para comprender la situación de los diversos grupos étnicos en la sociedad.

16. Observando la multiplicidad de los textos que garantizan la no discriminación y los recursos de que disponen las posibles víctimas, le sorprende que no se haya sometido a los tribunales ningún caso de discriminación racial en nueve años, como se desprende del párrafo 31 del informe. Se pregunta si ello se explica por la ausencia de denuncias, por el hecho de que éstas no hayan prosperado, por la falta de información de los ciudadanos sobre sus derechos, por su falta de confianza en los servicios policiales y en la administración de justicia o por el recurso a otros medios para resolver los conflictos raciales.

17. Por una parte, el Sr. de Gouttes toma nota de que la Convención puede invocarse ante los tribunales -y las decisiones judiciales suelen subrayar la importancia de los tratados-, pero observa por otra parte que según el párrafo 12 del documento de base (HRI/CORE/1/Add.60), los artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos "no son, en cuanto tales, directamente aplicables" por los tribunales mauricianos: se pregunta si se está ante un sistema monista o dualista y si la Constitución prima sobre el derecho interno mauriciano.

18. Por último, pregunta a la delegación de Mauricio si se prevén medidas para divulgar el 12.º informe de Mauricio y las conclusiones del Comité al respecto.

19. El Sr. SHERIFIS felicita muy especialmente a Mauricio por la información concreta y alentadora que ha proporcionado y por haberse hecho representar por una prestigiosa delegación.

20. Destaca en primer lugar, en el párrafo 6 del informe, una característica particularmente interesante de la práctica política del país: la que consiste en seleccionar a ocho de los miembros de la Asamblea Regional "entre los candidatos que han perdido las elecciones y están mejor situados" (párr. 6). Desea una información detallada sobre la manera de seleccionar a estos parlamentarios y sobre su mandato.

21. A continuación solicita información complementaria sobre la aplicación del artículo 5 de la Convención, a saber, cómo garantiza Mauricio a todas las comunidades una participación en la vida política del país, en qué medida se difunden programas de radio y televisión en qué medida en los idiomas de las diversas comunidades y si existen emisoras privadas, qué restricciones se imponen al derecho a circular libremente, y cómo se explica la sorprendente disposición de que el derecho a elegir cónyuge se reconoce siempre que no viole los derechos o libertades de los demás, el orden público o la moral.

22. Por último, formula a la delegación de Mauricio las tres preguntas que plantea a prácticamente todas las delegaciones: ¿está dispuesto el Gobierno a aprobar la enmienda que cambia la financiación del Comité? ¿Tiene la intención de hacer la declaración prevista en el artículo 14 de la Convención? ¿Se preocupa por divulgar la Convención y publicar las actas de los debates del Comité, o por lo menos sus conclusiones?

23. El Sr. VALENCIA RODRÍGUEZ expresa también su extrañeza por la designación de ocho miembros de la Asamblea Nacional seleccionados entre los perdedores en las elecciones. Desea saber qué grupos étnicos son generalmente los perdedores de esas elecciones, cuáles son los ganadores, y cómo garantiza el sistema la representación equitativa de todos los grupos étnicos.

24. Se felicita de todas las medidas adoptadas para aplicar el artículo 2 de la Convención, pero a propósito de la información proporcionada en los párrafos 13, 16 y 23 del informe, pregunta en qué casos se ha interpretado la Constitución con un espíritu de generosidad, cuáles son las excepciones a la prohibición de que se aprueben leyes discriminatorias, en qué medida afectan estas excepciones a los diversos grupos étnicos y si el artículo 282 del Código Penal se ha invocado en casos de discriminación de determinados grupos. Pregunta también por qué, pese a que el Gobierno afirma que no ha habido casos de discriminación racial, ha prohibido un libro que le parecía muy peligroso para la paz racial.

25. Con respecto a la información sobre el artículo 4 de la Convención, estima que las medidas adoptadas al respecto son insuficientes, habida cuenta del enorme ámbito de aplicación de este artículo.

26. A su juicio, se deben aclarar también las restricciones impuestas a la libertad de circular en el país y la enmienda a la Ley de ciudadanía para solucionar las dificultades de las mujeres extranjeras casadas con nacionales de Mauricio y de las personas con doble nacionalidad, que guardan relación con la aplicación del artículo 5.

27. El Sr. Valencia Rodríguez se felicita por la forma en que Mauricio aplica los artículos 6 y 7 de la Convención, y sólo le cabe recomendarle que prosiga en este camino.

28. El Sr. CHIGOVERA toma nota con satisfacción de la influencia de la Convención en las decisiones de los tribunales. Con todo, estima que convendría fortalecer esa influencia promulgando la legislación necesaria para incorporar la Convención en el derecho interno del país.

29. En la información sobre la aplicación del artículo 4, y por lo demás en todo el informe, no se encuentra nada sobre las medidas adoptadas para declarar ilegales a las posibles organizaciones racistas y para prohibir todo aliento al racismo por parte de un organismo público. El Sr. Chigovera recuerda que los Estados Partes están obligados a aplicar el artículo 4 íntegramente; ahora bien, el artículo 282 del Código Penal sólo concierne al apartado a de ese artículo.

30. Si bien la aplicación del artículo 5 parece ir por buen camino, la del artículo 6, en cambio, lleva a preguntarse si los menos favorecidos pueden recurrir a las medidas señaladas en el párrafo 93 del informe. Se agradecería cualquier información complementaria sobre la posible ayuda que se les proporciona, así como sobre la función que puede desempeñar el Defensor del pueblo en la protección contra la discriminación racial.

31. El Sr. ABOUL-NASR opina que si bien quedan algunas cuestiones todavía no aclaradas y aún no se aplican cabalmente ciertas disposiciones, Mauricio merece más elogios que críticas. En efecto, ¿cómo no celebrar el crecimiento económico del país y el hecho de que los mauricianos gocen en la vida corriente de los derechos enunciados en el artículo 5 de la Convención, como lo demuestran los ejemplos concretos proporcionados en el informe de ese país?

32. No está mal que los expertos tengan opiniones divergentes sobre tal o cual aspecto de la vida de un país, pues así se enriquece el debate. Sin embargo, deberían admitir que cada gobierno tiene el derecho, sobre todo cuando los recursos son limitados -y, por ejemplo, un censo es sumamente oneroso- de actuar en función de sus propias prioridades, con frecuencia diferentes de las de otros países. Es cierto que el Gobierno de Mauricio aún no ha terminado de cumplir su cometido, pero el Comité debe reconocer que ya ha obtenido excelentes resultados.

33. La delegación de Mauricio se retira.

Informes periódicos tercero a noveno del Zaire (CERD/C/237/Add.2); décimo informe periódico del Zaire (CERD/C/278/Add.1)

34. Por invitación del Presidente, el Sr. Marume Mulume (Zaire) vuelve a tomar asiento como participante a la Mesa del Comité.

35. El Sr. MARUME MULUME (Zaire) respondiendo a las preguntas y observaciones de los miembros del Comité, dice que la Ley constitucional de transición promulgada en 1994 reemplaza a la Constitución de 1967 que, con algunas enmiendas, había regido en el Zaire durante casi 30 años. Inicialmente, el período de transición debía expirar el 30 de julio de 1995, pero ante las dificultades materiales con que tropezaba la organización de las elecciones, el

Consejo Supremo de la República decretó su prórroga hasta el 9 de julio de 1997. Antes de concluir el primer trimestre de 1997 deberá aprobarse por referéndum una nueva Constitución; posteriormente, a más tardar en mayo de 1997, se organizarán elecciones generales para el Parlamento y la Presidencia de la República. Las autoridades zairenses están decididas a que se respete este plazo, porque el período de transición perjudica a todos.

36. Hace unos seis años se inició en el Zaire un proceso democrático. La Constitución anterior establecía un régimen de tipo presidencial que, asociado a un régimen de partido único, tenía por efecto concentrar la autoridad esencial del Estado en manos del Presidente de la República. La Ley constitucional establece ahora la división de poderes entre el Presidente de la República, el Gobierno y el Consejo Supremo de la República, o Parlamento de transición. Pero este cambio se ha efectuado sin elecciones; por lo que debieron establecerse las reglas para el período de transición. Habida cuenta de la multiplicidad de partidos -450 para una población de aproximadamente 45 millones de habitantes- que ha sucedido al régimen de partido único y del hecho de que no existiera la legitimidad que confiere un proceso electoral, se aprobó por consenso y tras las consultas celebradas conforme a la tradición africana, la Ley constitucional, que define las distintas competencias. El artículo 11 de la Ley (CERD/C/278/Add.1, párr. 5) no se contradice en absoluto con su artículo 78, en cuya virtud debe elegirse al Primer Ministro de una familia política distinta de la del Presidente de la República. Ambas disposiciones son complementarias: se imponía una reagrupación en dos "plataformas" o "familias políticas" de los 450 partidos políticos existentes, en espera de las elecciones, para permitir una suerte de "cohabitación" entre tendencias políticas diferentes, como se ha podido observar, por ejemplo, en Francia.

37. Se debe tener muy presente que el paso de un régimen de partido único a un sistema pluralista libera energías y pasiones contenidas durante mucho tiempo y se traduce en una serie de excesos de toda índole. En el Zaire esta situación se ha agravado por la crisis económica, social y financiera que afecta al país desde hace 15 años. En estas condiciones, la institución de la libertad sindical, del derecho a la huelga, del derecho a manifestar, etc. exige una cierta prudencia si se quiere impedir la destrucción de lo que queda de la infraestructura nacional. Lamentablemente, los dos primeros años del proceso de democratización han estado marcados por falta de control y por el saqueo de la economía nacional en 1991 y 1993. Esta situación entraña la inseguridad de las personas y de los bienes y frecuentes atentados contra los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los dos informes del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Zaire (E/CN.4/1996/67, de 1995, y E/CN.4/1996/66, de 1996), citados en la 1171.^a sesión, no reflejan suficientemente esta situación de hecho. Ahora bien, una cosa es la teoría, otra distinta la vivencia y la realidad cotidiana.

38. En materia de nacionalidad, la legislación zairense es muy liberal, como han observado los miembros del Comité. Con todo, la nacionalidad zairense es "una y exclusiva", y no se puede tener más de una nacionalidad. Toda persona que adquiere la nacionalidad zairense, con arreglo a uno de los medios previstos por la ley, debe renunciar a su nacionalidad anterior. Los conflictos étnicos vinculados con la nacionalidad que se han planteado en el Zaire oriental, que afectan a los banyarwandas de Kivu septentrional y a los banyamulenge de Kivu meridional giran en torno a la aplicación de la Ley sobre la nacionalidad.

En 1972, y más tarde en 1978, el Zaire procedió a efectuar regularizaciones en gran escala concediendo la nacionalidad zairense a millares de rwandeses que vivían en su territorio. Sin embargo, los beneficiarios de estas medidas no siempre se han comportado como hijos dignos de su nueva patria. Tres meses después de la toma de poder del Frente Patriótico Rwandés (FPR) en Kigali, muchos de ellos regresaron a Rwanda, por su propio interés. Se acusa a las autoridades políticas zairenses de fomentar el odio entre las etnias. No obstante, el Zaire es el país que acoge al mayor número de refugiados de África (procedentes de Angola, el Sudán, Uganda, Rwanda y Burundi). Muchos se han integrado, sin solicitar la nacionalidad zairense, y se encuentran muy bien en el país.

39. En la región de los Grandes Lagos el conflicto étnico que enfrenta a los refugiados y la población local se agudiza por un problema de repartición de tierras, que todavía no se resuelve. A la fecha hay en la República del Zaire aproximadamente 1.200.000 refugiados rwandeses y de 300 a 400.000 refugiados burundeses, o sea, un total de 1.600.000 ó 1.700.000 refugiados (últimas cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). La región de Kivu tiene 6 millones de habitantes, pero las ciudades cercanas a Rwanda y Burundi -Goma, 200.000 habitantes; Bukavu, 350.000 habitantes- acogen actualmente a 1.200.000 personas. Sus vetustas infraestructuras resultan insuficientes. Esta afluencia de refugiados provoca frustraciones, agravadas por las tensiones ya existentes. Los refugiados -antiguos y nuevos- se alían, con frecuencia en perjuicio de las poblaciones locales. Ante estas tensiones, el Zaire decidió organizar una repatriación forzada de los refugiados. Posteriormente suspendió la aplicación de esa medida a la espera de que la comunidad internacional organizara una repatriación voluntaria. Lamentablemente, dos años después, los refugiados rwandeses aún se encuentran en su territorio. Esta situación, de difícil manejo para el Zaire, también es fuente de tensiones para el Gobierno de Kigali: las autoridades rwandesas tienen la convicción de que el Zaire es la causa de sus males. Sin embargo, el Zaire nada tiene que ver con la dramática situación producida en Rwanda. Se ha limitado a acoger a los refugiados que llegaban al país. Esta situación debe analizarse dejando de lado toda idea preconcebida. Ahora bien, en su último informe, presentado hace 15 días, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Zaire afirma que las autoridades zairenses fomentan el odio y los conflictos étnicos. El representante del Zaire deplora que las afirmaciones de un relator especial que ha pasado 15 días en un país de 2,5 millones de kilómetros cuadrados tengan más peso que los elementos de información y las aclaraciones presentados por la delegación zairense a la Comisión de Derechos Humanos.

40. Se han hecho preguntas en relación con el respeto del derecho a un juicio con las debidas garantías y la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos. Esta impunidad no es el resultado de una voluntad política, sino de la debilidad de la autoridad, de la insuficiencia de los medios materiales y humanos y de la crisis general. Pese a estas dificultades, en 1994 se enjuició a unos 150 militares por infracciones que habían cometido. Asimismo, existen instrucciones del Ministerio de Justicia que recuerdan las normas que deben respetarse en materia de detención policial y de arresto y detención preventiva, en que se señala que toda infracción de estas normas expone a su autor a sanciones. En sus futuros informes al Comité el Zaire presentará datos estadísticos a este respecto. Otra pregunta tenía que ver con

los derechos políticos y la representación en la Comisión Nacional Electoral. El Sr. Marume Mulume señala que cada "grupo de partidos políticos" debe designar a cuatro representantes por región (hay 11 regiones en el Zaire), en espera de las elecciones. Por último, la Ley sobre los partidos políticos no autoriza partidos fundados en una ideología religiosa.

41. También se ha tocado el problema de la situación económica. De más está decir que la crisis que atraviesa el país tiene efectos desastrosos en el ámbito social, y en particular en los jóvenes. Es verdad que el Zaire dispone de un enorme potencial económico, pero es un hecho lamentable que sus riquezas no han permitido mejorar la situación en sectores como la enseñanza y la salud. Lo importante por ahora es corregir los errores del pasado y hacer del hombre nuevamente el centro del sistema político.

42. Al adherirse a varios instrumentos internacionales el Zaire se ha comprometido a sensibilizar a la población del país sobre las normas de derechos humanos y a garantizar una mayor difusión de las recomendaciones de los órganos convencionales de las Naciones Unidas. Desde hace algún tiempo, el Gobierno recuerda periódicamente a los responsables de los sectores clave de la sociedad, como los medios de información y la enseñanza, la necesidad de velar por que en la vida de todos los días se tengan en cuenta los principios enunciados en los instrumentos internacionales. A este respecto, el representante del Zaire pone a disposición de los miembros del Comité copias de las instrucciones impartidas por el Primer Ministro al Ministro de Educación Secundaria y Superior y a los responsables de la prensa escrita, exhortándoles a dar amplia cabida a estos instrumentos en sus respectivas esferas de competencia.

43. Si bien en general la legislación zairense concuerda con las normas internacionales, su aplicación deja mucho que desear. A semejanza de la promoción de los derechos humanos, la lucha contra la discriminación es una tarea de larga duración. Por lo tanto, conviene encarar decididamente el futuro y aplicar la legislación como no se ha hecho hasta ahora, para que cada día sea mejor que el anterior.

44. En la tradición zairense, la mujer no se ha considerado jamás inferior al hombre. El artículo 112 del nuevo Código de Trabajo adoptado en 1979 estipula lo siguiente: "En condiciones de igualdad de trabajo, de calificación profesional y de rendimiento, el salario será igual para todos los trabajadores, cualesquiera sean su origen, sexo o edad". En materia de sucesión, el nuevo Código de la Familia ha fijado con precisión la parte de la herencia familiar que corresponde a las mujeres.

45. Por último, representante del Zaire señala a los miembros del Comité que así lo han solicitado, que en adelante se adjuntarán a los diferentes informes y comunicaciones al Comité datos actualizados sobre la situación general del país, para que pueda seguir de cerca la evolución de la situación.

46. El Sr. CHIGOVERA dice que las cuestiones que desea señalar a la atención de la delegación no exigen una respuesta inmediata y sólo las plantea pensando en los informes que el Estado Parte presentará en el futuro. En un país de las dimensiones del Zaire no es por cierto fácil reunir datos completos sobre las 250 tribus existentes en el país. Con todo, espera que el informe siguiente aclare muchos aspectos al Comité, sobre todo si se considera que el Estado Parte

ha reconocido que las divisiones tribales pueden poner en peligro la estabilidad de la nación.

47. Conforme al artículo 11 de la Constitución, citado en el párrafo 5 del informe "Todos los zairenses son iguales ante la ley y tienen derecho a la igual protección de la ley". Ahora bien, en el párrafo 6 del informe se indica que el artículo 34 de la Constitución reconoce a los extranjeros el disfrute de la protección concedida a los zairenses en cuanto a su persona y sus bienes. Por lo tanto, la Constitución hace una distinción entre los dos grupos de población y, en consecuencia, es importante saber si la protección concedida a los extranjeros se extiende a otros derechos, como los derechos políticos, por ejemplo.

48. En diferentes párrafos del informe se hace referencia a multas por ciertos delitos de motivación racial o étnica. Esas multas se fijaron por ley hace 30 años, y cabe preguntarse, habida cuenta de la fuerte depreciación de la moneda zairense desde entonces, si los montos mencionados aún tienen alguna significación.

49. El Sr. SHERIFIS refiriéndose a la parte del informe que señala que el Presidente de la República y el Primer Ministro deben pertenecer a dos familias políticas diferentes, se pregunta cuál es el significado exacto de la expresión "familia política" y si se ha recurrido a esa fórmula para evitar que un partido monopolice el poder.

50. El Sr. de GOUTTES recuerda que la víspera señaló que el equilibrio de toda una región de Africa dependía de la situación en el Zaire. Teniendo en cuenta la afluencia masiva de refugiados, la crisis económica y social y las dificultades que caracterizan el período de transición, ¿no sería más conveniente pedir al Estado Parte que mantenga periódicamente informado al Comité sobre la evolución de la situación?

51. El Sr. DIACONU señala que en una declaración hecha en abril de 1996 ante la Comisión de Derechos Humanos el Ministro zairense encargado de la reforma institucional ha dado una respuesta indirecta a algunas de las preocupaciones expresadas por los miembros del Comité. En particular ha hecho algunas aclaraciones sobre los problemas étnicos. Al parecer, el conflicto con los banyamulenge se debe a que la población rwandesa quiere gozar de los derechos políticos sin optar por la ciudadanía zairense, lo que difícilmente puede admitirse. Como es manifiesto que no se trata de una cuestión de discriminación, el problema no incumbe al Comité. Además el Ministro ha mencionado otros dos casos: la prohibición de una secta xenófoba, dispuesta por el Gobierno y la destitución de un gobernador que era uno de los instigadores de una campaña de limpieza étnica. Independientemente del origen étnico del interesado, es una medida totalmente justificada.

52. El Sr. van BOVEN observa que, pese a las medidas adoptadas, la situación sigue siendo explosiva y, en consecuencia, es necesario seguir muy de cerca su evolución. Cabe felicitar a las autoridades zairenses por la delegación zairense en cuanto a la presentación periódica de sus informes. A este respecto, hay que recordar que el Zaire debe presentar su próximo informe el 21 de mayo de 1997.

53. Si bien el Comité ha recibido mucha información sobre el ordenamiento legislativo zairense, los detalles sobre la aplicación efectiva de las leyes son escasos. Además, el Comité no habría solicitado algunos datos básicos sobre las instituciones y la composición de la población si hubiese tenido ante sí un documento de base. Se alienta al Estado Parte a que presente ese documento, que puede ser utilizado por todos los órganos convencionales de las Naciones Unidas. En cuanto a la instalación de una oficina de derechos humanos en Kinshasa, el Sr. van Boven agradecería al representante del Zaire que comunicara a las autoridades de su país la importancia que asigna el Comité a que ello se haga lo antes posible.

54. Por último, el Sr. van Boven confía en que todas las preguntas que han quedado sin respuesta en el debate sean abordadas en el informe siguiente del Estado Parte.

55. El Sr. MARUME MULUME (Zaire), respondiendo al Sr. Chigovera, dice que se hará todo lo posible para que en el informe siguiente se incluyan datos demográficos detallados sobre las distintas tribus. En cuanto al trato de los nacionales y de los extranjeros, demás está decir que el Estado Parte tiene todo el derecho de reconocer los derechos políticos sólo a sus nacionales. En cambio, debe garantizar la igualdad entre ambos grupos de población en lo que respecta a la protección de la persona y los bienes.

56. En cuanto a las multas impuestas a los autores de delitos cometidos por razones raciales o étnicas, el representante del Zaire reconoce que las cifras que figuran en los documentos presentados al Comité no corresponden ya a la realidad. De hecho, el Ministerio de Finanzas y las autoridades judiciales ajustan periódicamente el monto de las multas, y habrá que velar en el futuro por que se faciliten datos actualizados.

57. Respondiendo a preguntas formuladas por el Sr. Sherifis, el representante del Zaire confirma que en el país hay efectivamente 250 tribus y 450 partidos. Para paliar esta dispersión de las fuerzas políticas, estos 450 partidos, todos los cuales aspiran al poder, han constituido, sobre la base de una plataforma política, dos bloques denominados familias políticas, no en el sentido tribal sino en función de sus afinidades.

58. Respondiendo a una pregunta formulada por el Sr. de Gouttes, el representante del Estado Parte dice que en la medida de lo posible las autoridades zairenses mantendrán al Comité informado periódicamente sobre la evolución de la situación en el país. En cuanto a la observación hecha por el Sr. Diaconu, señala que los instigadores de la campaña de limpieza étnica de que se trata han sido acusados ante los tribunales y, por su parte, velará por que se comuniquen próximamente al Comité las sentencias.

59. En cuanto a la instalación de una oficina de derechos humanos en Kinshasa, el representante del Zaire señala que según sus informaciones el Alto Comisionado para los Derechos Humanos espera la pronta llegada de una delegación zairense a Ginebra para la firma del acuerdo de sede.

60. El Sr. Marume Mulume (Zaire) se retira.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.